

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°008

Medellín, veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el grado jurisdiccional de consulta en favor del trabajador, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **GABRIEL FABIO LÓPEZ BEDOYA** contra **MECÁNICOS UNIDOS S.A.S.**

ANTECEDENTES

Pretensiones

El demandante solicita que se declare que su contrato de trabajo fue terminado mientras se encontraba protegido por la estabilidad laboral reforzada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; y, en consecuencia, se condene a **Mecánicos Unidos S.A.S.** a reintegrarlo con el pago de las acreencias dejadas de pagar desde la fecha del despido y a reconocer y pagar la sanción consagrada en el artículo 26 ídem (fl.4).

Hechos

El demandante sufrió un accidente laboral el día **23 de septiembre de 2015**, como consecuencia de este fue calificado por la **Junta Regional de Calificación de Antioquia** con una pérdida de capacidad laboral del 13.70% de origen laboral.

El día **15 de septiembre de 2017**, **Mecánicos Unidos S.A.S.** dio por terminado el contrato de trabajo sin justa causa con el pago de la respectiva indemnización (fls.3/4).

Mecánicos Unidos S.A.S.

La sociedad demandada a través de apoderado manifestó que son ciertos los hechos, precisando que para la fecha del despido no existía un tratamiento médico en curso, así como tampoco se presentaban restricciones o recomendaciones médicas, por lo que al no existir ninguna condición que impidiera el desempeño laboral del demandante no estaba obligada a tramitar permiso ante el **Ministerio del Trabajo**.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: petición de lo no debido, carencia de derecho sustantivo, inexistencia de nexo causal, prescripción, buena fe, pago y compensación (fls.81/94).

Sentencia de Primera Instancia

La Juez Primera Laboral del Circuito de Itagüí, en sentencia del **4 de septiembre de 2019**, absolvió a **Mecánicos Unidos S.A.S.** de las pretensiones por considerar que no demostró la parte actora que su despido se diera en razón de su limitación física, la que por demás fue calificada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en un **10,65%** lo que hace que no sea beneficiario de la protección establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y en ese orden no estaba el empleador obligado a solicitar permiso para su despido, procediendo a la prerrogativa legal de dar por terminado el contrato de trabajo con el pago de la respectiva indemnización.

Esta decisión no fue apelada por las partes por lo que al ser totalmente desfavorable a los intereses del trabajador fue remitida ante el inmediato superior para que la conociera en el grado jurisdiccional de consulta.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado establecido en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, el apoderado del demandante presentó alegatos de conclusión en los que solicitó que se **revoque** la decisión consultada en razón a que su representado fue despedido sin justa causa mientras se encontraba en el trámite calificación de la pérdida de capacidad laboral, lo que da cuenta una conducta temeraria y premeditada de eludir la protección consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Problema Jurídico

El problema jurídico a resolver en esta instancia, será: (i) Determinar si el señor **Gabriel Fabio López Bedoya** para el **15 de septiembre de 2017**, fecha en que fue terminado su contrato de trabajo se encontraba en condiciones de

debilidad manifiesta en razón de su estado de salud que lo hagan titular de la protección consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver, considera la Sala importante hacer las siguientes precisiones de conformidad con la prueba obrantes en el expediente:

1. Entre el señor **Gabriel Fabio López Bedoya** y **Mecánicos Unidos S.A.S.** existió un contrato de trabajo.
2. El día **23 de septiembre de 2015**, el trabajador sufrió un accidente laboral, cuyas secuelas fueron calificadas en primera oportunidad por la **ARL SURA** con una pérdida de capacidad laboral del 4.1% (fls.11/12).
3. Este dictamen fue recurrido por el actor, siendo calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, entidad que le asignó un porcentaje de pérdida del 13,70% estructurada desde el **5 de abril de 2017**. Esta experticia fue notificada el **28 de junio de 2017** (fls.21/26).
4. Mediante comunicado del **15 de septiembre de 2017**, **Mecánicos Unidos S.A.S.** informó a su trabajador de la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa con el pago de la correspondiente indemnización (fl.31).
5. El día **7 de marzo de 2018**, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez resolvió apelación interpuesta por la **ARL Sura** indicando que el actor tiene una pérdida de capacidad laboral del 10,65% de origen laboral estructurada desde el **5 de abril de 2017** (fls.151/154).

A partir de los anteriores hechos, procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento.

Del estado de debilidad manifiesta como consecuencia del estado de salud

Se afirma en la demanda que el contrato de trabajo existente entre las partes fue finalizado por el empleador el día **15 de septiembre de 2017** mientras se encontraba en condiciones de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud, manifestación a la que se opone **Mecánicos Unidos S.A.S.** indicando que para la fecha de terminación del contrato su trabajador no presentaba

ninguna condición de salud que le impidiera el desarrollo normal de sus labores.

En lo referente a las condiciones de salud del actor las pruebas obrantes en el expediente dan cuenta que este sufrió un accidente laboral el **23 de septiembre de 2015** como consecuencia del cual presenta una lesión en el hombro que fue calificada en forma definitiva por la Junta Nacional de Invalidez con una pérdida de capacidad laboral del **10,65%**.

Ahora, en lo que respecta a las condiciones de salud del actor para el **15 de septiembre de 2017**, fecha en que su contrato de trabajo fue terminado, se desprende de la propia confesión del demandante que para dicho momento llevaba un año sin presentar incapacidades médicas y no tenía restricciones o recomendaciones laborales, encontrándose en seguimiento por parte de su ARL.

Sobre este particular también declaró la testigo **Xiomara Patricia Jaimes Quintero**, quien informó, que, el demandante luego del accidente laboral presentó una serie de incapacidades más o menos hasta junio de 2016. Luego de esta mensualidad fue reintegrado a sus labores con una recomendación por 8 semanas, entre julio a septiembre de 2016, sin que con posterioridad y para la fecha del despido existieran restricciones o recomendaciones vigentes.

A partir de estos hechos, no advierte la Sala que el actor presentara para el **15 de septiembre de 2017** alguna limitación sustancial que impidiera el desarrollo de sus labores en condiciones regulares no siendo posible establecer una situación de debilidad manifiesta por el estado de salud, que deba ser protegida en los términos enseñados por la jurisprudencia constitucional en las sentencias SU-049 de 2017 y SU-040 de 2018.

En lo referente a la condición de salud susceptible de protección conforme con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, es importante citar la sentencia T-434 de 2020, donde la Corte Constitucional señaló que no se prueba esta calidad, cuando:

- (a) No se demuestra la relación entre el despido y las afecciones en salud, y la PCL es de un 0%.
- (b) El accionante no presenta incapacidad médica durante el último año de trabajo, y solo debe asistir a controles por un antecedente médico, pero no a un tratamiento médico como tal.

En el caso de autos, se destaca que se presenta la última de las condiciones, pues si bien, el actor se encontraba en controles por el antecedente médico del

accidente y el trámite de calificación de su pérdida de capacidad laboral, no se presentaron incapacidades médicas dentro del año inmediatamente anterior al despido, lo que permite establecer que no se encontraba en un estado de salud susceptible de ser protegido.

De otro lado, está el criterio de protección elaborado por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que ha indicado que se debe identificar las personas susceptibles de la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, siendo necesario para ello acudir a un criterio objetivo consistente en la pérdida de capacidad laboral del 15%, entendiendo que solo a partir de este porcentaje se puede predicar una condición de *discapacidad relevante*, que se convierte en barrera para acceder, permanecer o ascender en el empleo (sentencia SL-2841 de 2020).

Una vez revisada la prueba traída al plenario y en caso de que se siguiera esta línea se observa que el resultado definitivo del trámite de calificación de la pérdida de capacidad del actor es del 10,65%, luego tampoco resulta titular de la protección reclamada a la luz de lo enseñado por la jurisprudencia ordinaria laboral.

A partir de lo anterior, y dado que no probó el actor ser titular de la estabilidad laboral reforzada consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en razón a que no demostró que para la fecha de la terminación del contrato presentaba una condición de salud que le impidiera o dificultara significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades, se encuentra que fue acertada la decisión consultada y en ese sentido se **confirmará** el fallo absolutorio.

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la providencia de primera instancia dictada el día **4 de septiembre de 2019**, por la Juez Primera Laboral del Circuito de Itagüí, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **GABRIEL FABIO LÓPEZ**

BEDOYA contra **MECÁNICOS UNIDOS S.A.S.** de conformidad con las razones indicadas en la parte motiva.

Sin costas en esta instancia.

La anterior decisión se notifica por **ESTADOS**.

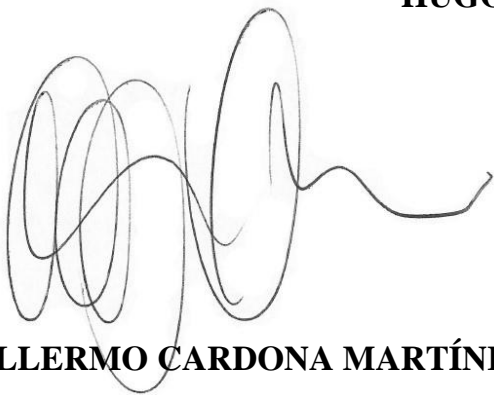
LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No.015** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín, **01 de febrero de 2021**

Secretario